

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 46
O R D I N A R I A
MARTES 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del martes veintiocho de abril de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Eduardo Medina Mora I. no asistió a la sesión previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y cinco ordinaria, celebrada el lunes veintisiete de abril del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes veintiocho de abril de dos mil quince:

I. 10/2013

Acción de inconstitucionalidad 10/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandado la invalidez de los artículos 27, fracciones I, II y III, y 37, fracción II, de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial estatal de ocho de marzo de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Juan N. Silva Meza se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 27 y 37 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro. TERCERO. La invalidez surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa entidad, sin perjuicio de que pueda tener efectos retroactivos en casos concretos, en el entendido de que en esos supuestos serán aplicables las disposiciones conducentes de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación del promovente y a la oportunidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando cuarto, relativo al estudio de fondo.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que el estudio de la competencia de la propuesta debió haber partido del artículo 73, fracción XXI, constitucional y de su contenido material en lo que refiere a la trata, conforme al cual la ley general deberá prever, como mínimo, los tipos penales y las sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación. Recordó que en los precedentes de este Tribunal Pleno, en especial la acción de inconstitucionalidad 26/2012, se consideró que se privó a los Estados de la atribución con que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, para legislar los tipos y sanciones en materia de trata de personas, sin embargo, mantuvieron sus atribuciones para prevenir, investigar y castigar ese delito, conforme al régimen de

conurrencia derivado de la fracción citada y de la ley general correspondiente. Estimó que no se puede establecer si el Estado puede o no regular un aspecto particular en materia de trata de personas si no se hace un contraste con el contenido de la ley general; en este tenor, los artículos impugnados resultan casi idénticos a lo dispuesto en la ley general en la fase de investigación, por lo que la mera duplicación de preceptos no genera la inconstitucionalidad por incompetencia, pues ésta puede ser producto de la falta de claridad sobre la distribución de concurrencias de la ley general, en la inteligencia de que no se está refiriendo a tipos penales y sanciones.

Opinó que la Legislatura del Estado de Querétaro es competente para legislar en materia de concurrencia operativa, siempre y cuando no contravenga la ley general, por lo que el proyecto debe analizar los artículos a partir de los conceptos de invalidez planteados en relación con las cuestiones sustantivas y, si bien la propuesta lleva a cabo este análisis, adelantó que el artículo 27, fracciones I, II y III, impugnado resulta inconstitucional al violar el derecho de la vida privada, a partir de un argumento similar al elaborado de su parte en la acción de inconstitucionalidad 32/2012 y, por lo que se refiere al diverso artículo 37, fracción II, combatido, el cobro de operación y mantenimiento del dispositivo contemplado también deviene inválido, como votó en la acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada, en razón de que existen medidas menos gravosas, aunque ese concepto de invalidez haya sido desestimado. Resumió

estar por la invalidez de los artículos en pugna pero por razones diversas a las del proyecto en suplencia de la queja. Anotó que los conceptos de invalidez planteados por el promovente están encaminados al contenido de los preceptos, no hacia la incompetencia del legislador de Querétaro.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció de acuerdo con la invalidez de los preceptos, pero por razones distintas, en tanto que se tiene que aplicar lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 por mayoría de nueve votos, en específico en sus páginas cuarenta a cuarenta y dos, que indican: *“Ahora, la Ley General correspondiente, al distribuir competencias en el artículo 5 estableció que la Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esa ley, cuando se apliquen las reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre que se produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero; en términos del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; el Ministerio Público de la Federación solicite la atracción del asunto; o sean cometidos por la delincuencia organizada. Cuando no se den los supuestos anteriores, el Distrito Federal y los estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos previstos en esa ley. Sin embargo, a*

diferencia de la Ley en materia de secuestro, no hay aplicación de normas locales, el artículo 9 de la Ley General en materia de Trata establece que en lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos ahí contenidos, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, aún en los supuestos de competencia local, para la investigación y el proceso penal serán aplicables supletoriamente a la ley general las citadas disposiciones federales, por lo que no se deja ningún margen de regulación siquiera de carácter procesal para las entidades federativas.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se expresó conforme con el proyecto al sustentarse en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, en la cual se señaló que los Estados no pueden legislar respecto de los tipos y sanciones establecidos para el secuestro y la trata de personas, siendo que únicamente pueden normar cuestiones de operación y aplicación de las sanciones, salvo que ya estén reguladas en la ley general, lo que implica que se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, manteniendo las facultades para prevenir, investigar y castigar dicho delito conforme al

régimen de concurrencia derivado del artículo 73, fracción XXI, constitucional y 5° de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el entendido de que, aun en los supuestos de competencia local para la investigación y el proceso penal, en términos del artículo 9 de dicha ley general serán aplicables las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no se deja ningún margen de regulación, ni siquiera procesal, a las entidades federativas. En esa tesitura, el Congreso de Querétaro carece de competencia para emitir normas procesales alusivas a los delitos de trata de personas.

El señor Ministro Franco González Salas recordó haber votado en contra de la decisión mayoritaria en el asunto mencionado por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, anunciando que mantendría esa posición.

La señora Ministra Luna Ramos recapituló que en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 se resolvió a partir del estudio del artículo 73, fracción XXI, constitucional, dado que la ley general se emitió hasta el diecinueve de marzo de dos mil catorce, por lo que indicó que sería conveniente, en este caso, analizar la ley local a partir de la Ley General para

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ya que ésta determina específicamente la distribución de competencias en sus artículos 5° y 6°, así como en el título tercero del libro segundo, referente a las facultades y competencias de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en donde se indica que, además de las competencias para investigar, perseguir y sancionar los delitos objeto de esta ley establecidas en libro primero y en el programa, corresponden de manera exclusiva a las autoridades federales las atribuciones en materia de políticas, precisión de los tipos y mecanismos de coordinación, entre otros, a partir de lo establecido en el citado artículo 73, fracción XXI, constitucional, el cual faculta al Congreso de la Unión para emitir las leyes generales en las que se establezcan los tipos y sanciones en materia de trata de personas, así como las demás atribuciones necesarias para establecer las competencias de la Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que se brinda la posibilidad de que la competencia sea mayor.

Apuntó que en el capítulo II del título tercero del libro segundo de la ley general de la materia se refiere que corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, diversas atribuciones relacionadas con la coordinación derivada de dicha ley, así como cuestiones administrativas en materia de concurrencia, lo cual se

contiene en sus artículos 114, 115 y 116. Preciso que los artículos 14 al 16 de la ley local repiten, algunas veces idénticamente, lo dicho en la ley general en sus artículos 60, 61, 66, 67 y 74; al respecto, resaltó que el proyecto contiene un cuadro comparativo de los artículos combatidos con los de la ley general.

Coincidió con la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos combatidos, estimando que debería hacerse extensiva a toda la ley por las razones aludidas por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, es decir, por lo que ve a la competencia específica de la Federación para legislar en materia de trata de personas. Indicó que el artículo 5° de la ley general delega competencia a los Estados exclusivamente en lo referente a las políticas públicas que se establezcan dentro de su demarcación territorial, siendo que si se determinó la inconstitucionalidad por falta de competencia del Congreso local, debería analizarse la ley local para detectar si existe algún artículo que comprenda alguna otra de las facultades reservadas constitucionalmente a la Federación. Recalcó que en el artículo décimo transitorio de la ley general se previó la obligación de los Congresos locales de armonizar su legislación con aquélla, y que por “armonizar” pudiera entenderse la derogación de los dispositivos locales que corresponden a alguna de las competencias específicas de la Federación, y en el caso concreto, el Congreso de Querétaro dejó prácticamente sin efectos los artículos de su código penal en materia de trata de personas; sin embargo, estimó que la ley local que se

estudia se excede de las competencias demarcadas por la ley general. Reiteró que, dado el precedente citado, la invalidez de los artículos en combate debería extenderse al resto de la ley, lo cual estaría a la determinación de este Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación intencional la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 37 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro, contenida en el punto resolutivo segundo de la propuesta, respecto de la cual se expresó unanimidad de diez votos a favor de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por razones diferentes, Luna Ramos, Franco González Salas separándose de muchas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra Luna Ramos consultó si se agregaría al proyecto lo referido en torno a la acción de inconstitucionalidad 21/2013 y el análisis de la ley general y la ley local, así como si se haría extensiva la invalidez al resto de la ley.

El señor Ministro ponente Silva Meza modificó el proyecto para recapitular que en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 se resolvió a partir del estudio del artículo 73, fracción XXI, constitucional, y que dado que la ley general se emitió con posterioridad, sería conveniente analizar la ley local a partir de la Ley General para Prevenir,

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de hacer extensivos los efectos de invalidez a la totalidad de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación definitiva la propuesta modificada de la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 37 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro, contenida en el punto resolutivo segundo de la propuesta, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz en contra de las consideraciones, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente. El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a la extensión de invalidez.

El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto en contra porque no estimó que fuera una incompetencia total del legislador para regular la materia de trata de personas, pues sería un desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), párrafo segundo, constitucional, en el sentido de que, de dejarse al legislador local sin atribución

alguna, desvirtuaría el sentido de la coordinación. Refirió que también podrían identificarse los artículos que se invalidarían como consecuencia de los mismos efectos, pero adelantó que no aceptaría ninguna de estas opciones, pues los legisladores de los Estados tienen posibilidades de regular, fuera de los cuatro supuestos de delitos, sanciones, organización y coordinación.

El señor Ministro Pérez Dayán se pronunció en favor de los efectos originales, sin ser aceptable extender los efectos de invalidez a toda la ley, puesto que el proyecto parte del estudio de la competencia en suplencia de la queja y, por ende, de incluirse otras razones por las cuales la norma es inconstitucional, entonces el ejercicio comparativo entre las disposiciones de la norma, lo cual con la ley general no sería suficiente, dado que el artículo 57, párrafo último, de la ley general refiere que, en los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el ejercicio de cualquiera de las atribuciones anteriores, la Procuraduría coadyuvará en la investigación, de lo que se desprende la entrega de competencia a las entidades para dictar la normativa para el ejercicio de las atribuciones contenidas en las fracciones del citado artículo 57, lo que implica una cláusula habilitante para normar dichas atribuciones. Acotó que la repetición del artículo 27 de la ley local con el 57 de la ley general demuestra únicamente una transcripción, pero se anuló el primero en función de una incompetencia, siendo que, de cualquier modo, prevalece la disposición segunda. Recapituló que, en esta estructura lógica del proyecto

derivada de la competencia, el efecto extensivo de invalidez sólo debe recaer en los artículos combatidos, no en toda la ley, pues conllevaría un análisis comparativo bastante más extenso.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que el proyecto se ajustó a la acción de inconstitucionalidad 21/2013, la cual estableció que las entidades federativas no son competentes para legislar en materia de trata de personas y se votó en consecuencia, por lo que lógicamente tendría que invalidarse toda la ley, siendo que la parte de la competencia, como expresó el señor Ministro Pérez Dayán, ya no subsiste en la propuesta.

El señor Ministro Pardo Rebolledo diferenció entre sustituir absolutamente el proyecto y tomar en consideración lo resuelto en otro asunto y, en el caso, no se clarificó suficientemente lo sucedido.

El señor Ministro Franco González Salas estimó que el problema radica en invalidar o no toda la ley por falta de competencia. Retomó que la señora Ministra Luna Ramos basó su intervención en el artículo 113 de la ley general y en las concurrencias que contempla el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, con lo cual convino en que se prevé un mínimo y que en la ley general podría haber otras disposiciones; sin embargo, no se debe leer aisladamente el artículo 113 de la ley general, sino sistemáticamente con su diverso artículo 5º y, consecuentemente, los Estados tienen facultades para investigar, procesar y sancionar el delito de

trata de personas y, por ende, su posición ha sido en contra del criterio mayoritario. En este sentido, se manifestó en contra de la propuesta de invalidez total de la ley, dado que se debe analizar en cada caso si el precepto de una ley local en materia de trata de personas sale del marco de concurrencia establecido.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que este Tribunal Pleno se ha pronunciado respecto del tema en los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 21/2013 y 26/2012, derivándose de la última la jurisprudencia de rubro *“TRATA DE PERSONAS. EL DECRETO No. 460 POR EL QUE SE MODIFICA EL TIPO PENAL RELATIVO, CONTENIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE FEBRERO DE 2012, INVADIR LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN.”*, con lo cual se declaró inválida una modificación al tipo penal en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional; sin embargo, se agregó que se mantenía a los Estados las facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito conforme al régimen de concurrencia derivado de dicha fracción XXI. Por otro lado, en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 se estableció que no tienen competencia los Estados para legislar en materia de trata de personas al haberse expedido la ley general respectiva, en la cual se regula el régimen de distribución de competencias establecido en la fracción XXI en cita, y que, con ese mismo

fundamento, las leyes generales en materia de trata de personas, de secuestro y delitos electorales reservan una parte de competencia para los Estados.

En ese orden de ideas, si se establece que los Estados ya no tienen ninguna competencia para legislar en materia de trata de personas, entonces se daría igual tratamiento al caso de la delincuencia organizada, respecto del cual el artículo 73, fracción XXI, inciso b), constitucional sí establece una facultad exclusiva de la Federación para legislarlo. Por eso, y sin desconocer el precedente establecido, no se podría concluir que no existe un ámbito de competencia para los Estados, por lo que no se debería dar un tratamiento que no le corresponde a la materia de trata de personas. Concordó con la señora Ministra Luna Ramos en que el inciso a) de la mencionada fracción XXI establece un mínimo en materia de trata de personas, pero no se puede llegar al extremo de imposibilitar a las Legislaturas estatales a legislar al respecto porque, a diferencia del tema de la delincuencia organizada, sí se les conserva un ámbito de competencia que debe ser coordinado a través de la ley general. Así, se pronunció en contra de la declaratoria general de invalidez de la totalidad de los preceptos que integran la ley impugnada, sobre la base de la incompetencia de los Estados en materia de trata de personas.

La señora Ministra Luna Ramos resaltó que en ambos precedentes, al momento de su resolución, aún no existía la ley general, y por ello insistió en hacer un análisis directo

entre la ley local y la general que no se había dado en ocasiones anteriores. Hizo hincapié en que el artículo 5°, fracción III, de la Ley General establece que la Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta ley en el caso previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, y posteriormente indica que el Distrito Federal y los Estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos, y que la ejecución de las penas por los delitos previstos en esta ley se regirán conforme a los ordenamientos aplicables en la Federación, el Distrito Federal y los Estados, en lo que no se oponga a la presente ley, así como que en su diverso artículo 6° se prevé que la Federación, los Estados, los municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta ley, con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente ley, con lo cual concluyó que existe una competencia, genéricamente, exclusiva de la Federación en su mayoría, pero que deja el resto a los Estados.

De manera más específica, dio lectura a los artículos 113, 114, 115 y 116 de la Ley General, de los cuales se desprende que únicamente se otorgaron facultades a las entidades federativas para cuestiones de naturaleza

administrativa, caso similar a los municipios, así como atribuciones concurrentes atinentes a difundir actividades de conocimiento y fortalecer tareas, con lo cual concluyó que no se otorgó facultades, ni a los Estados ni a los municipios, para legislar en la materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos de trata de personas, tanto por lo resuelto en el precedente con base en el artículo 73 constitucional como por lo previsto en el artículo 9 de la Ley General. Por estas razones, estaría con el proyecto en la parte que invalida, en vía de consecuencia, el resto de la ley local, aclarando que los Estados únicamente tienen competencia para legislar los aspectos contenidos en el artículo 114 de la Ley General.

El señor Ministro Cossío Díaz recapituló que en la acción de inconstitucionalidad 26/2012 se determinó que, como el legislador de Colima generó un tipo penal de trata de personas, se presentó una violación clara al artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, lo cual debe distinguirse del diverso inciso b) relativo al a delincuencia organizada, pues el Constituyente no generó exactamente el mismo modelo normativo. Indicó que la explicación de la señora Ministra Luna Ramos no le convenció porque se sustituye a la Constitución con una ley general, en el entendido de que el Congreso de la Unión no puede distribuir arbitrariamente las atribuciones, sino que sólo debe legislar los tipos penales, las sanciones, las distribuciones de competencias y las formas de coordinación. Tampoco coincidió en que la supletoriedad, en términos del artículo 9º

de la ley general, sea un argumento concluyente, por lo que no se puede considerar que se excluyó toda posibilidad legislativa. En el caso, precisó que la pregunta que debe plantearse es si el legislador de Querétaro tiene competencia en materia de trata de personas a partir de la Constitución, no de una ley general y, en ese caso, ver en qué aspecto se extralimitó en sus competencias, artículo por artículo; sin embargo, de afirmarse lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, la cual proscribe absolutamente la legislación local, entonces se puede argumentar que toda ley local debe invalidarse, recordando que él y el señor Ministro Franco González Salas votaron en contra de ese criterio mayoritario.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó que en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 se analizó una ley de ejecución de sentencias y el código procesal penal de Nuevo León, cuyos temas principales eran la prueba de ADN de testigos como única fórmula para identificarlos, la restricción de las comunicaciones en ciertos delitos, la vigilancia especial y la prisión preventiva, los cuales no tienen que ver con el tema de trata de personas, externando preocupación adicional en relación con que la ley cuestionada sólo reproduce lo que establece la ley general y que el único punto de comparación con el precedente es la competencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con veinte minutos.

El señor Ministro ponente Silva Meza precisó que la modificación del proyecto implica que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 21/2013 sólo se usará para reforzar el argumento de incompetencia del Poder Legislativo local en materia de trata de personas y, con ello, declarar la invalidez de los preceptos impugnados y, en su caso, por extensión a toda la ley en cuestión.

El señor Ministro Pérez Dayán agradeció la aclaración del señor Ministro ponente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada consistente en declarar la invalidez extensiva a toda la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro, respecto de la cual se manifestó una mayoría a favor de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos con precisiones, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó no declarar la invalidez extensiva a toda la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo a los efectos de la declaratoria de invalidez, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con treinta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves treinta de abril de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".